vinetur

# La justicia de Singapur avala la suspensión del jefe del grupo Castel

El fallo refuerza a Romy Castel en la pugna por el control del imperio francoafricano de bebidas

lunes 3 de agosto de 2026



La Alta Corte de Singapur ha rechazado el recurso presentado por Grégory Clerc, director general del grupo Castel, contra la suspensión de su mandato como administrador de Investment Beverage Business Management (IBBM), una de las principales sociedades de cartera del grupo. La resolución, fechada este jueves, 30 de julio, supone un nuevo episodio en la disputa abierta por el control de una de las mayores compañías francoafricanas del negocio del vino y las bebidas.

Según informa AFP, Clerc, de nacionalidad suiza, había recurrido su apartamiento del consejo de IBBM después de que la junta general de esa sociedad aprobara a comienzos de febrero su revocación. En febrero, la propia Alta Corte ya había confirmado de forma provisional esa suspensión. El directivo cuestionaba la validez de la votación celebrada en la junta extraordinaria.

Una decisión sobre el fondo del litigio podría llegar “a finales de octubre”, declaró a AFP una persona próxima a Romy Castel, hija única del fundador del grupo, Pierre Castel, de 99 años. Esa misma fuente sostuvo que el fallo conocido este jueves es una señal favorable para la posición de Romy Castel en el proceso abierto en Singapur.

La pugna interna divide desde hace meses a la cúpula del grupo. Romy Castel, aliada con Alain Castel, sobrino del fundador y director general de la filial histórica Castel Vins, acusa a Clerc de una “captación del poder”. A juicio de ambos, la salida de Clerc del consejo de IBBM debería acarrear también la pérdida de otros cargos que ocupa dentro del conglomerado, al frente del cual está desde 2023.

La dirección del grupo mantiene otra lectura. Su entorno sostiene que la decisión adoptada por la justicia singapurense no altera el procedimiento principal, centrado en determinar si determinadas resoluciones fueron realmente aprobadas en la junta extraordinaria de IBBM celebrada a principios de febrero.

Castel es un grupo con fuerte presencia en vino, cerveza y refrescos en África y Francia. Entre sus marcas figuran Baron de Lestac, Listel y Kriter, además de la red comercial Maison Nicolas. La empresa cuenta con unos 40.000 empleados y se articula mediante varias sociedades hasta llegar a su holding operativa en Luxemburgo, DF Holding, dirigida por Clerc y situada por encima de tres grandes ramas: Castel Vins, Castel Afrique y la filial agroindustrial Somdia.

La batalla societaria no se limita a Singapur. A finales de junio, la dirección del grupo apartó a Romy Castel y Alain Castel del consejo de administración de Castel Vins. Además, ambas partes mantienen procedimientos judiciales en Suiza y Luxemburgo.

En Ginebra, Romy Castel ha presentado una denuncia contra Clerc por “gestión desleal” y “blanqueo de dinero” por hechos que se remontan al periodo en que él era su abogado fiscalista personal, según una persona próxima a la denunciante citada por AFP. En Luxemburgo también se ha registrado otra denuncia contra el directivo por presunto abuso de bienes sociales relacionado con su remuneración. Esa acción incluye un pacto de salida valorado en 36 millones de euros si abandonara el grupo. La semana pasada, la fiscalía luxemburguesa confirmó a AFP que había recibido esa denuncia y que iba a analizarla.

Clerc también ha impulsado acciones judiciales contra Romy Castel. La heredera, residente en Suiza, está investigada en Ginebra por falsedad documental y uso de documento falso tras una denuncia presentada por el propio directivo. Clerc le atribuye haber utilizado sin autorización la firma de su padre en un poder; ella lo niega.

La disputa llega en un momento delicado para el grupo desde el punto de vista financiero y reputacional. Castel facturó 6.500 millones de euros en 2024 y su filial Castel Vins ha señalado que la compañía se expone en Francia a una regularización fiscal que podría alcanzar hasta 1.000 millones de euros en su tramo más alto.

El conflicto tiene efectos potenciales para el sector de bebidas porque afecta al gobierno corporativo de un actor con peso en vino, cerveza y refrescos en varios mercados. La evolución judicial puede influir en decisiones internas sobre filiales, marcas y estrategia empresarial dentro de un grupo con presencia amplia tanto en Francia como en África.